

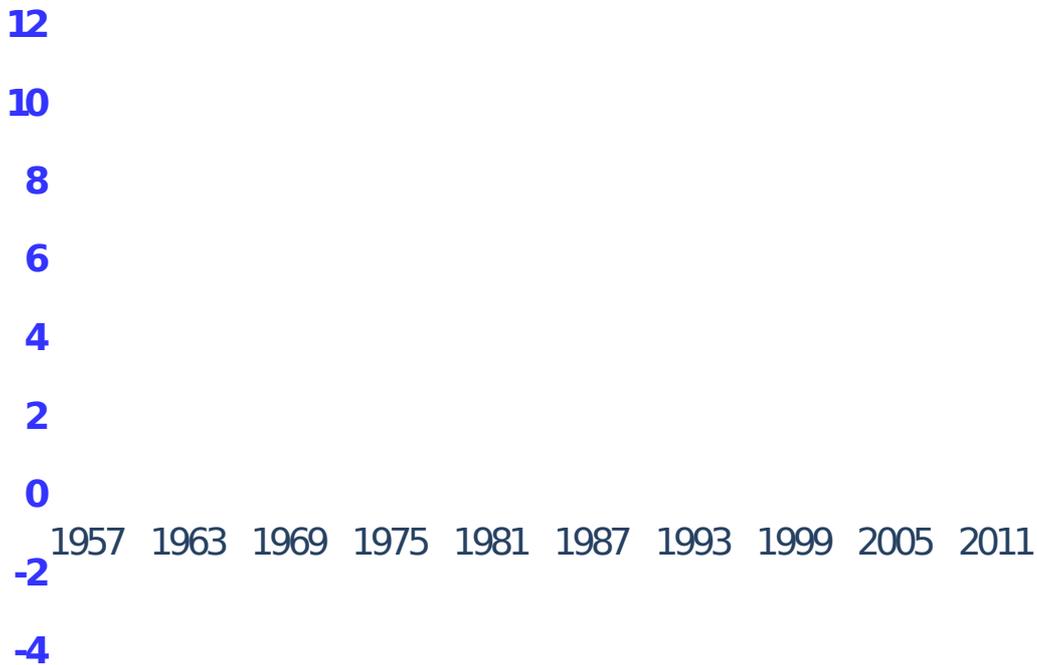
DE CRISIS EN CRISIS: 50 años de historia económica

Introducción La gravedad de una crisis, tanto en términos de crecimiento como de empleo, que en España son sinónimos, depende de la magnitud de los desequilibrios que impiden mantener el vigente esquema de crecimiento. Sin embargo, la salida de la crisis no depende necesariamente de la gravedad de los problemas que nos llevan a ella sino de la respuesta institucional y social a la situación planteada. Una respuesta generalmente deficiente que ha hecho que nuestras crisis hayan sido más duras y más largas que la media europea. Lo que ganábamos en las fases de expansión lo perdíamos en las etapas de recesión, sobre todo en materia de empleo, la asignatura pendiente de nuestro devenir económico.

Dado que estamos ahora en el seno de la mayor crisis que hayamos vivido desde que se tiene memoria, viene bien que reflexionemos sobre los momentos difíciles que hemos atravesado durante los últimos cincuenta años, que es más o menos el período del que se disponen de datos estadísticos. Sobre todo si se tiene en cuenta que, a partir de ahora, y como aseguran los periodistas cada quince días, ya nada volverá a ser igual, lo que esta vez tiene visos de ser verdad. Esta vez es diferente, esta vez venía el lobo de verdad, hasta el punto de que lo mismo que el Plan de Estabilización de 1959 constituye el acontecimiento seminal de nuestra historia económica, la crisis de 2008, por ponerle una fecha inicial, representa un antes y un después.

¿Podemos obtener alguna enseñanza de esta historia, en el fondo tan dramática? De eso trata este pequeño relato de nuestras malandanzas y fortunas.

De crisis en crisis. En casi todas las crisis se entra de manera muy parecida pero se sale de manera muy distinta como demuestra la historia de las coyunturas recesivas por las que hemos atravesado. Desde que existen datos estadísticos fiables y más o menos completos, España ha atravesado por **cuatro crisis** significativas que se han traducido en caídas del PIB más o menos profundas. Son las del llamado Plan de Estabilización (1959), la crisis del petróleo (1974), la de los fastos de la Olimpiada y la Feria Mundial de 1992, y la actual, la de la burbuja inmobiliaria. Posiblemente, un comentario sobre estas crisis aporte algo de luz sobre la actual, no tanto sobre cómo se ha generado (de eso sabemos bastante) como su posible salida y su, tememos, larga duración.

Cuadro nº 1: PIB 1957-2011

Fuente: EL PAIS, 26 de julio de 2009

Se puede ver en el cuadro adjunto, que recoge la evolución del PIB a lo largo de los últimos cincuenta años. que la economía española padece una crisis grave cada quince años aproximadamente. Unos quince años transcurren desde el Plan de Estabilización hasta la crisis del petróleo, otros quince desde los Pactos de la Moncloa, hasta la crisis de 1992, y otros quince hasta el inicio de la crisis actual.

Tal vez sea una casualidad, o tal vez la confirmación de que transcurrido ese tiempo, el esquema de crecimiento utilizado se vuelve obsoleto y obliga a tomar medidas extraordinarias. Hay que imponer un parón en el crecimiento antes de dar paso a un nuevo recorrido expansivo. De todas maneras, llama la atención que una economía con tantos problemas estructurales, que se estaba transformando con enorme retraso, no haya sufrido mayores problemas. En el fondo, ello es debido a la suerte de que ha gozado la economía española en el sentido de que, a pesar de su aislamiento original y su proteccionismo integral, no ha dejado de formar parte de una economía europea que ha ejercido un efecto de succión que nos ha impulsado, casi siempre, para bien.

El Plan de estabilización. A finales de los cincuenta, la economía española se debatía todavía en el círculo vicioso del subdesarrollo. Condicionada por el desastre que supuso la Guerra Civil, no se había beneficiado para nada de la reconstrucción europea debido al aislamiento político que imponía una dictadura que pretendía vivir a todos los efectos de espaldas al mundo. La autarquía, una idea personal del general Franco, era un ensayo de autosuficiencia. Se quiso producir lo que necesitábamos y consumir lo que producíamos, es decir, el modelo opuesto al liberal del intercambio y las ventajas comparativas.

Como es de suponer esta idea absurda, muy en la línea de otros arbitrios del mismo tipo, tropezó con los problemas consabidos: escasez de ahorro para financiar un proceso de crecimiento sostenible, falta de productividad, producto de un mercado demasiado estrecho que no facilitaba la especialización ni las economías de escala, y carencias en materia de tecnología, lógicas en un país que nunca había investigado y cuya principal asignatura pendiente era la educación de los ciudadanos.

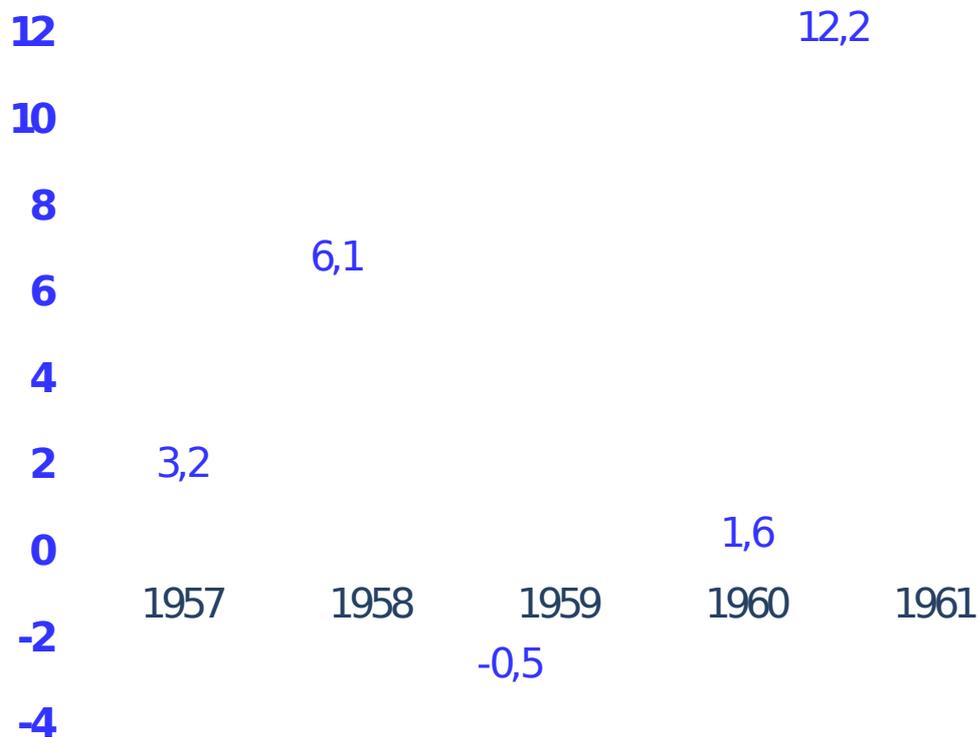
Cuando a la altura de 1959, la balanza de pagos asfixia la capacidad de crecimiento (se dice que sólo había divisas para hacer frente a las importaciones de gasolina de unos quince días), expertos del Banco Mundial en colaboración con técnicos del Banco de España plantean una operación reformista que rebasaba ampliamente los límites marcados por el Régimen. Había que romper la hipótesis de continuidad iniciando una política liberalizadora que incluía salir al exterior y resolver el cuello de botella que suponía una balanza de pagos casi siempre deficitaria.

Lo que entonces se llamó Plan de Estabilización, puede considerarse como la plantilla de planes similares que luego se irán adoptando en el tiempo. Esos planes han incluido casi siempre:

- una devaluación, dado que nuestra inflación suele ser muy superior a la del entorno, y la economía ha dejado de ser competitiva.
- una contracción monetaria rigurosa. En una economía tan dependiente del crédito ello servía para estrangular la demanda y el propio crecimiento nominal.
- una consolidación fiscal con fuertes recortes del gasto público que hasta entonces había evadido cualquier disciplina.

- algunas reformas estructurales, muy suaves, como una liberalización exterior, con reducción de barreras arancelarias, y una liberalización interna de ciertos mercados cautivos, sobre todo en relación con la inversión exterior.
- una ayuda crediticia exterior para paliar los dolorosos efectos de las medidas anteriores y soportar la transición.

El plan de 1959 tuvo un éxito casi inmediato. Los créditos exteriores no llegaron a utilizarse, y la caída de la demanda sirvió para cambiar el signo de la balanza de pagos y acumular reservas. Al poco tiempo, la economía demarró en flecha. Por primera vez en veinte años, los españoles encontraban la manera de llevar a la práctica, con todas las limitaciones del mundo, sus deseos de una vida mejor y un futuro más esperanzador. Como se puede ver en el gráfico adjunto, el Plan de Estabilización tuvo un efecto rebote. Se entró muy rápido en la crisis y se salió aún más rápidamente. El cambio de esquema consumió muy poco tiempo demostrando la procedencia de los planes aplicados que si en algo pecaron fue de timidez. Pero la costra conservadora de la sociedad española de aquel tiempo, el franquismo más riguroso, era demasiado dura y las resistencias al cambio considerables.

Cuadro nº 2: Plan de Estabilización

Fuente: INE

Pero lo que verdaderamente empezó a funcionar a partir de entonces fue el impulso exterior que aportaron tres factores esenciales. Al Régimen, y al país, le sonrió la suerte bajo la forma del turismo, la emigración y la inversión exterior. En aquellos tiempos, y a lo largo de toda la década de los sesenta, las exportaciones equivalían a una tercera parte de las importaciones por lo que obtener las divisas necesarias era esencial. Las entradas por turismo, las remesas de los emigrantes (llegó a haber más de un millón de españoles trabajando en condiciones penosas en Europa), y los ingresos por inversiones proporcionaron los recursos necesarios para compensar el permanente déficit comercial. Había, eso sí, que modular los ritmos de crecimiento, cosa que la política económica no consiguió casi nunca. De aquella época es la frase de que *"cuando el déficit de la balanza comercial supera los 2.000 millones de dólares hay que parar la economía"*. Así se hizo en 1966 y 1970 cuando la impaciencia por crecer desbordó los límites citados.

La crisis sirvió de punto de partida para iniciar un cambio paulatino del modelo de desarrollo. Con enorme timidez nuestra economía empezaba a asomarse al mundo.

Todo un revés al modelo autárquico que el general había defendido. Se dice que cuando los responsables del Plan, entre los que se encontraba un economista del Banco de España, catalán y republicano, llamado Sardá Dexeus, le informaron del mismo, el dictador no pronunció palabra, dejó hacer, y a partir de ese momento nunca volvió a opinar sobre temas económicos en los consejos de ministros. Ojala los presidentes de gobierno de la democracia hubieran seguido su ejemplo.

La economía española alcanzó durante los años sesenta un crecimiento vertiginoso, probablemente el más rápido del mundo después de Japón, del orden del 7% de media anual. Hay que tener en cuenta que eso ocurría diez años después de que Europa hubiese iniciado su propio despegue. Además, el punto de partida era desastroso. En 1960 España apenas tenía 300 dólares de renta per cápita y casi la mitad de la población activa seguía ligada a la Agricultura. La autarquía había mantenido a los españoles durante más de veinte años en la más absoluta miseria. A lo largo de la década de los sesenta, esos españoles se esforzaron por recuperar el tiempo perdido (la generación del seiscientos); el Régimen intentó un acercamiento a la Europa del Mercado Común en 1963, intento fallido por razones obvias, pero consiguió en 1970 un Acuerdo Preferencial que facilitó las exportaciones.

De todas maneras, el modelo tenía limitaciones obvias que eran producto en parte del propio subdesarrollo y en parte de un proceso de liberalización demasiado tímido y excesivamente lento. España siguió aferrada al proteccionismo, ahora no tan integral como antes, a un exceso regulador que permitía a la Administración intervenir en todos los aspectos de la vida económica (los apuntalamientos múltiples), y al desarrollo de una serie de sectores protegidos (siderurgia, naval, petroquímica, energía) que consumieron montañas de dinero tanto público como privado. El crecimiento siguió un perfil en dientes de sierra muy poco eficiente (el llamado *stop and go*). Esencialmente, seguíamos atados a lo que se llamó "*desarrollo hacia dentro*", un mercado cautivo que era muy cómodo en la medida en que evitaba la competencia pero que carecía de los incentivos necesarios para innovar o ser más eficiente. Creíamos pero no evolucionábamos.

La crisis del petróleo. El modelo entró en crisis en 1973 por una circunstancia fortuita: la crisis del petróleo, el arma elegida por los países árabes para castigar el apoyo que recibía Israel por parte de los países occidentales. Nuestra economía era, y sigue siendo, muy dependiente de una energía importada que, además, ha administrado de manera poco eficiente. Cuando el precio del barril de petróleo se disparó (pasó de

cuatro dólares a doce y luego a dieciocho), el déficit comercial aumentó hasta los 10.000 millones de dólares, algo que la balanza de pagos no podía asimilar.

Después de una trayectoria de catorce años aparentemente sin problemas, la economía entró en crisis, crisis que coincidió con la transición democrática, que no quiso entender de problemas económicos. La inflación se disparó, los Sindicatos mostraron su peor cara, y alentaron subidas salariales vertiginosas. El paro, hasta entonces inexistente (el paro registrado era poco más de un 1%), empezó a subir a partir de 1975 de manera irresistible.

Hasta 1977, cuatro años después, no se intentó seriamente afrontar la crisis. Los llamados Pactos de la Moncloa trataron, con enormes dificultades, de controlar una inflación que se había acercado al 30%, en parte consiguieron moderar los salarios, y aplicaron algunas reformas, ante todo fiscales (había que recaudar), pero no solucionaron el principal problema, un problema que nos perseguiría durante cuarenta años, un mercado de trabajo franquista por el que los ajustes económicos afectan siempre al empleo y no a los salarios, con los Sindicatos intentando demostrar que una cosa no tiene nada que ver con la otra.

Por estas y otras razones la crisis se prolongó y provocó la primera gran selección de empresas, especialmente industriales. Lo que no habían conseguido las rebajas arancelarias y la apertura exterior lo logró la caída de la demanda. Muchas empresas cayeron en cuenta que eran demasiado grandes para el mercado interior pero demasiado pequeñas para el mercado exterior. Todo el mundo hacía de todo y todo el mundo hacía lo mismo. El desarrollismo ni había sancionado ni seleccionado. El sistema económico fue puesto a prueba, prueba que no superó.

La crisis logró acabar con las Acciones Concertadas, restos jurásicos de los planes de desarrollo, en los que el Estado volcó cantidades inmensas de dinero para aumentar las capacidades productivas de sectores como la Siderurgia integral o la Naval. Baste decir que el último plan de estas características se fijó como objetivo que nuestros astilleros produjeran un millón de T.R.B; durante muchos años la producción real no pasó de las 150.000 toneladas. Lo mismo ocurrió con la Siderurgia. Se intentó producir 18 millones de toneladas de acero; durante años la demanda no rebasó los ocho millones. Liquidar esos excesos de capacidad productiva costaron lo que no está escrito, costes que incluyeron jubilar a gente de 52 años con pensiones que triplicaban

ampliamente la media nacional. Los Sindicatos han sugerido tímidamente que tales privilegios deberían extenderse a todo el mundo. La economía vudú.

La crisis también alcanzó a la Banca en la medida en que era el soporte financiero casi único de la mayor parte de las empresas, especialmente industriales; el mercado de capitales sólo ha funcionado para unos pocos. Unos sesenta bancos (Banca Catalana, Banco de Granada, Rato, Coca, Fierro, de los Pirineos, de Navarra y muchos otros) entraron en crisis y tuvieron que ser intervenidos para ser cedidos a otras entidades. Fue la primera gran reconversión bancaria, pilotada por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España, que no se anduvieron con tantos miramientos como los que han paralizado su iniciativa treinta años después. El progreso no siempre avanza hacia adelante.

La crisis supuso todo un fiasco. Se ha dicho siempre que la transición política resultó un éxito pero la transición económica fue un completo fracaso. Desde entonces hemos padecido, en buenas y malas coyunturas un paro elevadísimo, lo que ha lastrado el crecimiento económico cuyos niveles de convergencia con Europa han mejorado muy poco en todo ese tiempo.

Cuadro nº 3: Crisis del Petróleo

	PIB		Tasa paro				
9							
	8,6					21,5	22
7							
5			3,9				17
3					2,1	2,9	
1		-0,1		-0,2	-0,5		12
-1	1973	1975	1977	1979	1981	1983	1985
-3							7
-5							2

Fuente: INEyBDE

Como se puede ver en el gráfico, la crisis no se afrontó ni se resolvió sino que se convirtió en un problema permanente durante un largo período de tiempo, desde 1974 hasta 1985, período en el que las tasas de paro empezaron a ser elevadísimas y el crecimiento económico muy escaso. A diferencia del Plan de Estabilización, esta vez no existió un plan de ajuste coherente y sistemático, aplicado contra viento y marea. La nueva democracia facilitó muy poco los consensos necesarios para encontrar la manera de limitar los costes sociales, y las reformas se aplicaron con suma lentitud y en algunos casos ni eso.

Realmente, no se abordaron los problemas que se habían gestado hasta la llegada de los socialistas al poder en 1982. González escoge un buen ministro de economía, Miguel Boyer, que sí aplica un verdadero plan de estabilización. Los socialistas, que habían prometido crear 800.000 puestos de trabajo en la legislatura, destruyeron otros tantos en sólo tres años pero pusieron a punto la economía para un nuevo período de expansión que se produjo a continuación y en el que afloraron los problemas que nos conducirían a la crisis de 1992. Las crisis españolas siempre tienen su origen en los errores cometidos en el ciclo de crecimiento anterior.

Hasta ahora por lo menos, España nunca ha sido capaz de hacer aquello que recomendaba hace muchos años el Banco de España: *crecer menos para crecer más tiempo*. En ello tuvo buena parte de culpa el propio Felipe González, que prescindió de Boyer en 1985 en la constitución del nuevo Gobierno, cuando este pidió plenos poderes. A los líderes socialistas, González primero y Zapatero después, con los conocimientos teóricos adquiridos en dos tardes, les ha gustado meter mano en la economía, en contra del ejemplo de Franco, y, como se ha podido comprobar, con resultados dolorosos.

Tampoco conviene ignorar que las circunstancias sociales eran adversas, como se pondría de manifiesto en la huelga general de 1988, cuando los sindicatos derribaron cualquier atisbo de racionalidad en materia salarial y de gasto público. La influencia decisiva que los Sindicatos han tenido en la vida económica de este país ha sido nefasta. Desde 1980, es decir a lo largo de 32 años, hemos padecido tasas de paro superiores al 15% durante 23 años. Evidentemente esto no es normal, sobre todo si se tiene en cuenta que en Europa, cuyos ritmos de crecimiento no han sido mejores que los españoles, las tasas de paro casi nunca ha rebasado el 10%. Ningún error económico ha sido más grave que este y se lo debemos a los Sindicatos y su incapacidad para admitir realidades elementales, como que no es posible perseguir a la vez objetivos salariales y objetivos de empleo, que los salarios tienen que tener como referencia la productividad y no la inflación, y que en una crisis hay que prescindir de parte de la plantilla para no despedir a toda. Era el "*o todos o ninguno*". Generalmente acababa siendo ninguno. Como decía un empresario extranjero, "*en España es más fácil echar a una parte de la plantilla que convencer a los trabajadores para que se bajen el sueldo*", y continuaba "*y es más fácil despedir a toda la plantilla que a una parte*". Qué se puede esperar de un mercado de trabajo así. Pues que sea una máquina de destruir empleo.

A todo ello hay que añadir la euforia que suscitan los períodos de expansión. Pasando de la más negra desesperanza a la suposición de que todo es posible, el comportamiento de los españoles deviene incontrolable. La gente pierde su natural cautela a la hora de invertir o de gastar dando por supuesto que todo acabará bien, como hemos podido comprobar recientemente. El Estado, que debería frenar el optimismo, se suma como el que más a la euforia. A partir de 1988 no solo se produjo un descontrol total del gasto público sino que, animado por los efectos de la integración en Europa, que se había producido en 1986, tratamos de ser tan europeos

como el que más, y nos incorporamos al Sistema Monetario Europeo, el antecedente inmediato del euro.

Aquello era un intento de establecer un sistema de cambio más o menos fijo. Cuando se borran las fronteras, las distintas monedas y sus tipos de cambio se convierten en la última barrera para un mercado único. España tenía que haber sido particularmente cautelosa hacia una operación semejante dada su incapacidad para mantener una mínima disciplina en materia de precios y salarios. Un país que había hecho de las devaluaciones una práctica habitual se embarcaba en un proceso que implicaba todo lo contrario. Y es que, como dijo Solchaga, entonces ministro de economía, ello nos iba a obligar a ser más prudentes en el gasto público y moderados en materia salarial. No hace falta decir que no lo fuimos.

La decisión implicaba consecuencias que iban a ser letales para nuestra economía. Como el tipo de referencia fijado (65 pesetas por marco alemán) estaba sobrevalorado, se entendió necesario defenderlo por medio de una política monetaria de altos tipos de interés. Ambos aspectos suponían enormes dificultades para las empresas. El tipo de interés básico del Banco de España se acercó al 15%, un crédito a tres años al 20% y un descubierto en cuenta al 30%. Ello debería haber frenado la inflación a costa de deprimir la actividad si no fuera porque las reivindicaciones salariales siguieron siendo las mismas de siempre (inflación mas lo que sea) y el gasto público se descontroló por efecto de la universalización de la sanidad y la educación, y el gasto excepcional de la Feria de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Un comportamiento perfectamente esquizofrénico que nos llevó a la crisis de 1992.

La crisis del 92. Con un raro sentido de la oportunidad, la economía se vino abajo a partir de junio de 1992, en pleno desarrollo de los Juegos y la Expo, y empezó a destruir empleo a una velocidad nunca vista anteriormente. Para 1993, la tasa de paro se había situado en el 25%. El Gobierno intentó mantenerse en sus trece pero después de haber gastado inútilmente buena parte de la reserva de divisas en defensa de la cotización de la peseta, se vio obligado a sacar a España del SME.

España se salvó de una crisis aún peor de manera totalmente involuntaria, cuando los mercados consideraron que la peseta estaba sobrevalorada y decidieron especular contra ella. Se produjeron tres devaluaciones sucesivas en 1993, en plenas elecciones, a pesar de los cual los socialistas fueron reelegidos, lo que retrata la cultura económica de este país. La peseta se situó en 85 unidades por marco, un tipo

de cambio mucho más lógico. Como ya no era necesario defender la paridad, los tipos de interés cayeron en vertical. Dos de las principales razones de la crisis se habían resuelto por sí solas, lo que es sin duda un buen método.

Otras dos cuestiones tardaron un poco más. Como la destrucción de empleo fue particularmente rápida, llegó un momento en que empezaron a despedir a los fijos. Los salarios se moderaron de inmediato mostrando que la única manera de contener los salarios consiste en hacer del despido una alternativa real. Por otra parte, el déficit público se había situado en el 7,5% del PIB, una cifra enorme para la época. Cuando se hicieron públicas las condiciones de entrada en el euro (3% de Déficit y 60% de Deuda) estábamos muy lejos de las mismas pero como el país conservaba intacto el espejismo europeo, pareció que merecía la pena hacer un esfuerzo extraordinario, más por una mejora de la recaudación que por un plan de austeridad. La Administración siempre ha creído que son los ciudadanos los que deben esforzarse.

Lo ocurrido ahora en materia de déficit no es diferente, sólo que se trata de un esfuerzo totalmente desproporcionado. Si en los noventa se tardó diez años en reducir un déficit del 7,5% (a un ritmo inferior a un punto anual), y eso que la economía crecía por encima del 3%, es fácil imaginar los sacrificios que habría que hacer para bajar el déficit del 11,2% al 3% en sólo cuatro años (más de dos puntos anuales), en un período en que el crecimiento medio será probablemente negativo. Se trata de un programa destinado al fracaso, cuyo incumplimiento agravará la pérdida de confianza internacional y nos sumirá en una crisis aún mayor, por lo que se necesitará un plazo adicional de ajuste de por lo menos dos o tres años.

Cuadro nº 4: Crisis del 92

Fuente: INE y BDE

El panorama cambió muy rápidamente y la economía se recuperó a una velocidad inusitada. Como se puede ver en el gráfico adjunto, ya en 1994 estábamos creciendo de nuevo. Nada que ver con la crisis anterior. Esta vez se parecía extrañamente a la de 1959, con su efecto rebote correspondiente, y es que las devaluaciones tienen un efecto milagro. No resuelven los problemas de fondo (mas bien los difieren) pero sacan al país del estancamiento.

A lo largo de los noventa, la economía española se benefició de los efectos positivos de la devaluación y el abaratamiento del dinero. A ello se añadió una moderación salarial que duró unos años y una cierta prudencia en materia de gasto público. La memoria, o mas bien la falta de ella, es parte inseparable de la marcha de nuestra economía. Se podría hacer todo un ensayo acerca de cuanto dura en la población el impacto emocional de una gran crisis como la de 92 (no se olvide que la tasa de paro llegó al 25%). Probablemente no más de un lustro.

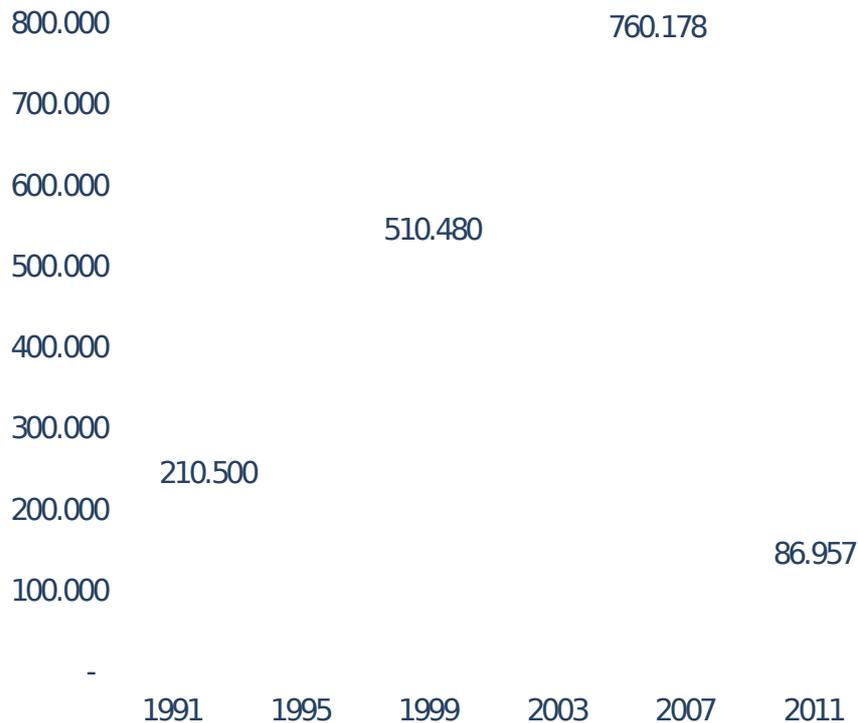
Para finales de siglo, los empresarios se habían olvidado de ser moderados en materia de endeudamiento (no trabajar para el banco), los políticos de los problemas del gasto público, los asalariados de la prudencia salarial y los ciudadanos en general de la crisis que habíamos sufrido. Pero lo que hizo descarrilar definitivamente el carro de la economía española fue el euro. Si no hubiera sido por eso, la expansión hubiera

durado cinco o seis años como máximo. Hacia el año 2000, y siguiendo la pauta habitual, hubiéramos tenido que devaluar, nos hubiéramos visto obligados a subir los tipos de interés y frenar el crédito, con lo que no hubiera habido burbuja inmobiliaria alguna; el gasto público hubiera seguido el mismo camino, lo que hubiera frenado la monstruosa contratación de personal que la Administración hizo durante esos años. Sin el euro nos hubiéramos visto obligados a reconocer que nuestra economía tiene ciertos techos que no conviene rebasar.

El euro nos ahorró todo eso al precio de alimentar una crisis muchísimo mayor. El BCE impuso unos tipos de interés artificialmente bajos, los que convenían en aquel momento a Alemania pero no a nuestra inflación. El euro también proporcionó flujos crediticios aparentemente ilimitados para financiar una balanza de pagos que alcanzó el mayor déficit de la historia, 10,5% del PIB. La expansión duró demasiado tiempo, catorce años, y los errores que se cometieron entonces los vamos a pagar durante otros tantos.

La gran recesión. El origen de la crisis de 2008, también conocida retóricamente como la gran recesión, es muy sencilla: hemos sido víctimas propiciatorias y cómplices de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Por toda una serie de razones objetivas, la recuperación de los años noventa incide de manera directa en la Construcción. La tasa de paro descendió rápidamente, la generación más joven consiguió emplearse y pensó en establecerse; numerosos extranjeros hicieron de España su lugar de retiro o residencia; las familias españolas eran cada vez más pequeñas, la segunda vivienda se generalizó, y sobre todo enormes flujos inmigratorios demandaban un ampliación del número de viviendas. Hasta ahí todo normal.

El Estado no intentó atemperar el enorme volumen de viviendas en construcción, en parte porque suponía ingresos fiscales de gran cuantía, especialmente para las corporaciones locales. El sistema financiero, que empezaba a tener problemas de viabilidad, (los márgenes de intermediación se habían reducido extraordinariamente), tampoco limitó una concentración del riesgo desmesurada, que violaba todas las reglas bancarias conocidas. Cuando llegó la crisis, el sector inmobiliario representaba el 60% de la actividad crediticia. El Banco de España protestaba por unos incrementos crediticios absolutamente anormales, de hasta el 35% interanuales, pero no llegó a intervenir porque las entidades financieras adujeron que los índices de morosidad eran prácticamente simbólicos. Y el proceso se nos fue de las manos.

Cuadro nº 5: Viviendas iniciadas

Fuente: INE

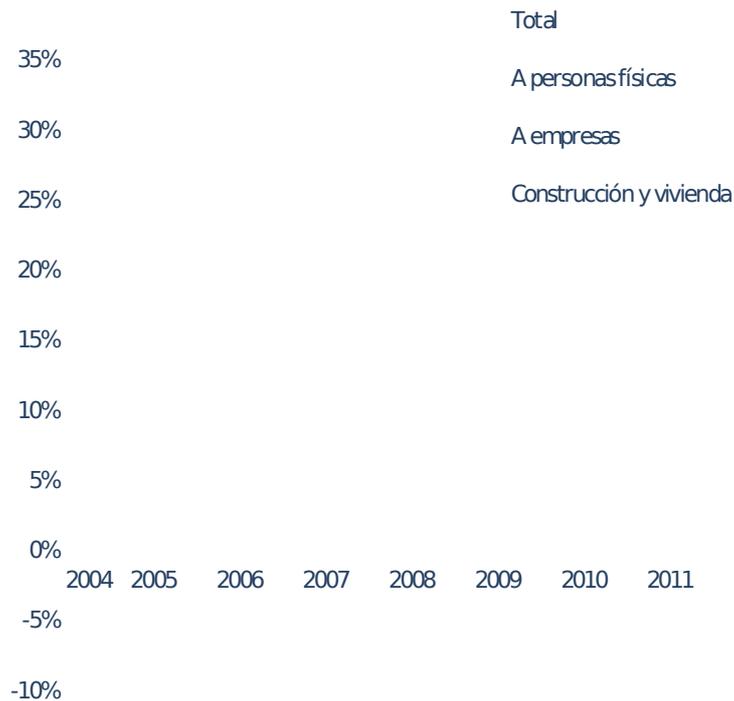
España, que habitualmente construía una media de 200/300.000 viviendas al año, lo que se corresponde con la demanda natural, llegó a iniciar la construcción de 760.000 viviendas en 2006, más que todas las que construían conjuntamente Francia, Alemania y Gran Bretaña. A la demanda habitual se habían sumado todos aquellos que creyeron ver en la vivienda una forma segura y fácil de especular dado que los precios subían de manera constante. Entre 1998 y 2007 el precio medio de la vivienda creció un 178%, mucho más que los salarios. Bajos tipos de interés y largos plazos de amortización extendieron en clases sociales de escasa capacidad adquisitiva, los mileuristas, la tentación de hacerse con una vivienda en propiedad, aunque ello supusiese entraparse durante larguísimos períodos de tiempo.

Aunque todo el mundo estaba de acuerdo en que el proceso no podía tener continuidad, se desarrolló la teoría, que el Gobierno socialista alimentó, de que en el peor de los casos se produciría lo que se llamó un "*aterrizaje suave*", es decir, una gradual moderación de los precios acompañada de un frenazo en la fiebre constructora. No ocurrió nada de eso. Una ligera subida de tipos de interés aumentó las dudas y retrajo la demanda. A partir de 2007, la crisis financiera internacional indujo comportamientos financieros más prudentes, sobre todo hacia las naciones más endeudadas, y España era claramente una de ellas, especialmente su sector privado.

Los mercados financieros retiraron bruscamente la alfombra que tan generosamente habían puesto bajo nuestros pies. Como la construcción de viviendas se caracteriza por su largo proceso de maduración y requiere una financiación considerable en todas sus etapas, desde el suelo hasta la venta de la vivienda, el proceso se detuvo primero y luego se derrumbó pillando debajo a todo el sistema financiero español.

Fue una catástrofe cuyas consecuencias seguimos penando cuatro años después. Es verdad que la banca no tenía hipotecas *sub prime*, como orgullosamente se encargó de divulgar el Gobierno. Teníamos algo mucho peor. El pinchazo de la burbuja secó la liquidez y destruyó la solvencia de casi las tres cuartas partes del sistema. Las Cajas de Ahorro sobre todo quedaron, salvo excepciones, muy malparadas y se vieron obligadas a seguir procesos de fusiones y absorciones que redujeron su número de unas cuarenta y cinco a tan sólo quince, proceso que no se ha detenido y que no finalizará hasta que no queden más de cinco o seis.

Las pérdidas han sido monumentales. Pero lo peor es que la estrategia seguida por el Banco de España y las propias entidades financieras ha sido lo más parecido a enterrar la cabeza en la arena. Una política de opacidad, de resistencia a reconocer los hechos, de falsear los índices de morosidad a base de refinanciaciones, de dejar pasar el tiempo a la espera de que el mercado inmobiliario resucite, que ha sido peor remedio que la enfermedad. La principal prioridad, una solución a la insolvencia, está siendo planteada ahora y no se sabe cómo ni cuando será implementada. A diferencia de la crisis bancaria de los 80, el Banco de España apenas ha intervenido entidades y no ha querido saber nada de la que sin duda era su primera tarea a la hora de actuar ante la crisis: sanear las entidades para normalizar la concesión de créditos, que no han dejado de caer en todo este tiempo. En lugar de eso, se ha dedicado a embarcarles en procesos de fusión en los que se ha perdido un tiempo precioso.

Cuadro nº 6: Evolución del crédito

Fuente: Banco de España

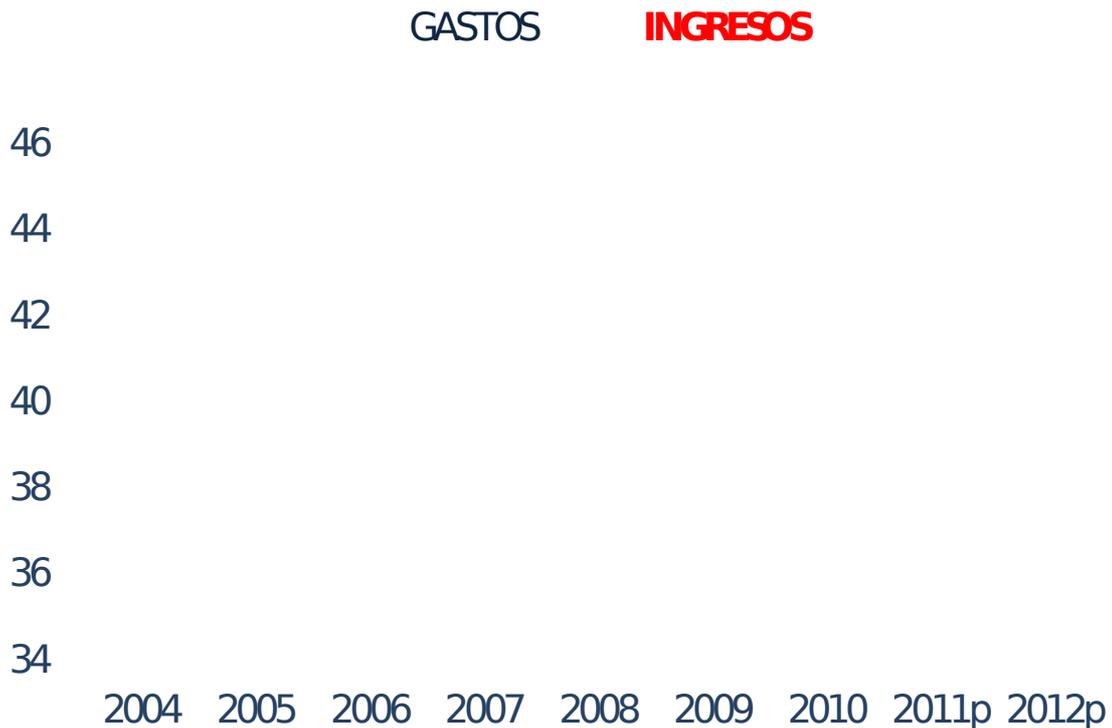
Si la crisis inmobiliaria ya era un golpe muy duro, la crisis bancaria ha supuesto un golpe aún más duro. La economía española no sólo entra en recesión en 2009 como las demás sino que vuelve a entrar en crisis en 2011, con consecuencias como mínimo para 2012 y 2013, revelando así que casi todos los problemas planteados siguen sin ser afrontados y mucho menos resueltos.

A la crisis inmobiliaria y la crisis bancaria, cara y cruz de una misma realidad, hay que añadir la crisis fiscal, que es lo mismo que decir la crisis del Estado. España tenía antes un cuantioso endeudamiento privado. Ahora, además, tiene un importante endeudamiento público. La suma de ambos casi triplica el importe del PIB. Tal vez no representaría un problema para una economía en expansión. Pero en una economía en recesión supone un riesgo evidente. En el mejor de los casos sólo pagará renovando o ampliando los créditos anteriores, lo que choca de lleno con la desconfianza de unos mercados que huyen de nuestras emisiones.

Durante años, el crecimiento económico había alimentado espectaculares incrementos de la recaudación. Catorce años de expansión a ritmos superiores al 3% habían provocado un aumento aún mayor del sector público. Haciendo oídos sordos a las advertencias de que buena parte de esos ingresos eran totalmente coyunturales y se derivaban de la Construcción, el Estado desarrolló una política presupuestaria que

apenas tuvo en cuenta una consideración esencial: el gasto público es rígido por definición pero los ingresos fiscales están muy condicionados por la coyuntura. Esta contradicción se puso claramente de manifiesto cuando llegó la crisis. Mientras el gasto público crecía vertiginosamente en 2009, casi 80.000 millones de euros más que el año anterior, la recaudación fiscal se reducía significativamente.

Cuadro nº 7: Déficit público



Fuente: INE y BDE

Se abrió un boquete enorme que llevó el déficit hasta el 11,2% del PIB en 2009 cuando dos años antes había habido un pequeño superávit. En los dos años siguientes, 2010 y 2011, el Estado sólo fue capaz de reducirlo al 9,4%, menos de un punto de PIB al año, lo que ha colmado la desconfianza de los mercados que están abandonando posiciones en materia de Deuda pública española. Nadie se fía de España y los únicos que invierten en Deuda son los propios bancos españoles, hasta ahora unos 250.000 millones, con dinero del BCE, en lo que puede considerarse como un rescate subrepticio. Contrariamente al sentir popular, que cree de buena fe que el Estado ha rescatado a los bancos, son estos los que, en realidad, han rescatado al Estado.

Aunque la recesión se debe sobre todo a la caída del crédito y la pérdida de competitividad, no hay duda que el esfuerzo de consolidación fiscal que España tiene que llevar a cabo, un esfuerzo descomunal, agravará la recesión en la que estamos inmersos sin conseguir resultados significativos en la reducción de dicho déficit. Se calcula que una reducción de un punto de déficit supone una caída de 0,6 puntos en el PIB. Como la pescadilla que se muerde la cola, recortes de gasto de semejante entidad, en 2012 no menos de 40.000 millones de euros (hay que tener en cuenta que determinadas partidas como pensiones, desempleo, o intereses de la Deuda seguirán creciendo imparablemente), agravarán los ya conocidos problemas de crecimiento sin darnos ninguna seguridad, más bien al contrario, de que se alcancen los objetivos en materia de déficit. La propia Comisión Europea calcula que en 2013 el déficit español rebasará el 6% del PIB, cuando debería estar en la mitad, y la Deuda Pública superará el 90%. Estos incumplimientos deteriorarán aún más la escasa credibilidad del Estado y la economía española en un momento en que el apoyo de la Comisión Europea y el soporte de los mercados es esencial.

Por nuestra mala cabeza, y el defectuoso diseño del euro, nos enfrentamos a un panorama para el que no tenemos respuestas. Con el euro hemos perdido la posibilidad de devaluar, algo esencial en un economía que nunca ha sido capaz de mantener la misma disciplina de precios y salarios de Europa, y hemos sacrificado la posibilidad de emitir moneda y disponer de un prestamista de último recurso. Gran Bretaña, cuyos problemas son muy parecidos a los nuestros, paga un 2% por su deuda a largo plazo. España está cerca de pagar el 7%. Si tenemos en cuenta que el crecimiento nominal de España se situará en 2012 en torno a cero, un coste semejante es literalmente suicida. La economía española atraviesa unos de los momentos más difíciles de su historia.

Una década perdida. Los españoles se han encargado de arruinar una excelente posibilidad de convertirse en una nación moderna, y tienen que enfrentarse ahora, en circunstancias muy difíciles, a tres problemas fundamentales.

1. *Déficit fiscal* Es el de consecuencias más graves. La manera irresponsable con que se ha edificado *el nuevo Estado*, tanto desde el punto de vista de su tamaño, evidentemente sobredimensionado, como de su eficacia, bajo mínimos ha quedado en evidencia al llegar la crisis. Una Administración que ha reiterado los viejos vicios, que no se ha visto obligada en ningún momento a ponerse al día, a pensar en términos de eficiencia, que ha preferido siempre crecer a mejorar su productividad, cuyos trabajadores, muy desmotivados, no son sancionados ni incentivados (ni palo ni zanahoria).

Ya hemos visto que el mayor déficit presupuestario alcanzado por la economía española no pasó del 7,5% en 1992. En la crisis del petróleo, el déficit fiscal se mantuvo en los alrededores del 5%. Nada que ver con la tarea ciclópea que tenemos ante nosotros, la de reducir un déficit que ha llegado al 11%, en plena recesión, sobre todo si se tiene en cuenta el escaso entusiasmo con que políticos y funcionarios están abordando la tarea de "encoger" un Estado que no se puede sostener después de la crisis. Hasta ahora, dos gobiernos sucesivos han fracasado en esa tarea hasta el punto de provocar un formidable encarecimiento de la Deuda (prima de riesgo) y serias dificultades para encontrar quienes la financien. Los mercados nos han dado la espalda y España se encuentra al borde del rescate. Se hace bueno el tópico liberal: el Estado no es la solución, es el problema.

2. *El proceso de liberalización.* Un proceso que se ha quedado a medias en casi todos los mercados, y especialmente en el mercado de trabajo, aunque lo mismo se puede decir de muchos otros. La consecuencia de ello es una considerable pérdida de competitividad, ya que siempre padecemos una inflación de precios y salarios más intensa que el resto de países de la zona euro, un error que ya no podemos corregir con una devaluación. Carecer de flexibilidad se paga a un alto precio porque destruye la capacidad de adaptación de un sistema económico cuando se le somete a un intenso proceso de cambio.

Si tenemos en cuenta que los costes salariales crecieron 37 puntos más que la productividad en el período 1998-2009, nos podemos hacer una idea de lo que eso supone en términos de competitividad. La esperanza de que esa deriva se pueda

corregir es bastante remota ya que la aplicación de la reforma laboral se hará esperar. Ello nos coloca ante la necesidad de intentar una *devaluación interna* muy difícil de implementar, o padecer niveles de paro muy elevados durante mucho tiempo.

3. *El colapso del sistema financiero*. La crisis bancaria ha sido la peor de la historia. La apuesta que es sistema financiero, especialmente las cajas de ahorro, hizo por el sector inmobiliario, al que prestaron hasta el último momento el dinero que tenían y el que no tenían, contra todo principio de diversificación del riesgo, supone para muchas entidades tener que empezar de cero. Una advertencia para todos aquellos que piensan que la Banca es no sólo un magnífico negocio sino también muy seguro.

Nunca había quedado nuestro sistema financiero tan malparado a resultas de una crisis. Crisis sobre todo su solvencia ya que cuando los balances se limpien de todos los activos tóxicos las pérdidas totales del sistema se aproximarán a los 250.000 millones. Si tenemos en cuenta que la banca solía ganar unos 16.000 millones anuales (reducidos a la mitad el pasado año) nos podemos hacer una idea de lo que costará recuperarse del desastre. No se puede negar que los principales responsables de esa situación son el propio sistema financiero y el Banco de España pero no cabe duda que el euro proporcionó la posibilidad de ir demasiado lejos. Los apoyos posteriores del BCE han sido limitados y tardíos si bien han evitado de momento el rescate, al menos formalmente.

Finalmente, hay un problema que ni siquiera pertenece al terreno de la economía pero que ejerce una influencia indudable sobre ella: el *fracaso educativo*, tanto de la escuela como de la universidad, que ha privado, generación tras generación, a la economía española de los directivos y técnicos que podían haber sido un revulsivo modernizador en la labor de ponerse al día y renovar la oferta productiva con la incorporación de las nuevas tecnologías y la creación de equipos humanos.

Esos problemas condicionan de manera determinante la salida de la crisis. Recordemos lo que decíamos al principio: no se trata sólo de la gravedad de los problemas planteados sino también de la respuesta a los mismos. Desde hace cincuenta años, medio siglo, la economía española protagoniza procesos de cambio y crecimiento que nos han convertido en una nación moderna. Eso es sin duda cierto pero también lo es que no sabemos afrontar las crisis: fracasamos en cuanto las cosas se nos tuercen. Por eso mantenemos nuestro retraso relativo en relación a Europa, y por eso las crisis por las que atravesamos se convierten en tragedias sociales que

marginan a amplias capas de la sociedad. O sea, que hemos aprendido muchas cosas pero seguimos sin aprender otras tantas.

De hecho, en la resolución de los tres problemas referidos y después de cuatro años de crisis seguimos en un estadio preliminar. En el que más se ha avanzado es en la recomposición del sistema financiero. Finalmente, el Banco de España ha intervenido entidades que estaban a punto de desaparecer y existe un respaldo financiero de 100.000 millones aprobado por Europa que, por lo menos, tapaná los agujeros más importantes; el resto de entidades hará el resto absorbiendo a las más débiles, pero el crédito tardará en descongelarse. En el terreno de la liberalización de mercados los avances son muy modestos por no decir inapreciables y hay muchas dudas sobre la aplicabilidad de la reforma más importante, la del mercado de trabajo. De hecho, los salarios siguen subiendo. En cuanto a la reforma del Estado y la consolidación fiscal el fracaso es absoluto. Hemos pasado de pensar que no saben hacerlo a convencernos que no quieren. El más importante grupo de presión de España, los funcionarios, ha dejado meridianamente claro que se opone a toda medida que recorte sus derechos.

A la vista de cómo se ha producido el descenso a la realidad en las tres áreas más delicadas de la economía española, y la lentitud con que se va a desarrollar el proceso de ajuste, podemos tener la seguridad de que nos vamos a instalar en la crisis durante un tiempo muy largo. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que la crisis en la que estamos inmersos se parece mucho más a la de 1973 que a las de 1959 y 1992. No hay mas que ver el perfil gráfico de la evolución del PIB. Si la crisis del petróleo duró doce años no hay razón para pensar que ésta pueda durar menos. Como hemos visto, no sólo las circunstancias son ahora mucho más difíciles sino que carecemos de respuestas eficaces.

Cuadro nº 8: La Gran Recesión

Fuente: INE y BDE

Todos ello ha tenido un impacto devastador sobre nuestro potencial de crecimiento que no es otra cosa que la capacidad para crecer en el medio y largo plazo sin generar desequilibrios. Un potencial que tiene que ver con la disposición para innovar o asimilar tecnologías, con los niveles de formación y emprendizaje, con la movilidad social, con la calidad de la Administración, con la seguridad jurídica y los niveles de corrupción. Todo lo que forma parte de la capacidad de reacción social y empresarial, algo en lo que nunca hemos sobresalido especialmente. Este potencial de crecimiento, siempre difícil de calcular, podía ser del orden del 3% en los años noventa. Ahora no pasará del 1%.

Las perspectivas son, por consiguiente, muy oscuras. Pase lo que pase, solucionar los problemas mencionados nos llevará toda la década, lo que quiere decir que habremos perdido ese tiempo con todas las consecuencias que ello supone. Ello no equivale a que todos los años se cierren en negativo. Es de suponer que habrá años, a partir de 2014, en que se crecerá pero serán incrementos modestos que no compensarán las recaídas que es probable que se produzcan. Y es que los efectos de la reducción del

endeudamiento a través de una contracción del gasto público y del crédito privado, así como la pérdida de competitividad, serán demoledores.

Esta estimación se parece mucho a la que ha hecho el FMI que anticipa una década perdida en términos de crecimiento. España no volvería a recuperar el PIB alcanzado en 2008, el máximo de su historia, hasta 2017, y eso con ciertas dosis de optimismo.

Cuadro nº 9: Los diferentes ritmos de salida de la crisis en los países avanzados

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PAÍSES CON UNA RECUPERACIÓN RÁPIDA											
SUIZA	97,9	100,0	98,1	100,8	102,7	103,5	105,3	107,2	109,2	111,3	113,5
PAÍSES CON UNA RECUPERACIÓN DISCRETA											
ALEMANIA	99,2	100,0	94,9	98,3	101,3	101,9	103,4	104,7	106,1	107,4	108,8
ESTADOS UNIDOS	100,0	99,7	96,2	99,1	100,8	102,9	105,4	108,5	112,1	116,0	119,9
FRANCIA	100,0	99,8	97,2	98,5	100,2	100,7	101,7	103,6	105,6	107,6	109,8
PAÍSES CON UNA RECUPERACIÓN LENTA											
JAPÓN	100,0	99,0	93,5	97,6	96,9	98,9	100,6	102,1	103,4	104,6	105,8
REINO UNIDO	100,0	98,9	94,6	96,6	97,2	98,0	99,9	102,5	105,2	108,0	111,1
PAÍSES CON UNA RECUPERACIÓN MUY LENTA											
ESPAÑA	99,1	100,0	96,3	96,2	96,9	95,1	95,2	96,3	97,9	99,6	101,5
PORTUGAL	100,0	100,0	97,1	98,4	97,0	93,8	94,2	96,1	98,0	99,8	101,3
ITALIA	100,0	98,8	93,4	95,1	95,5	93,7	93,4	93,9	94,8	96,0	97,1
GRECIA	100,0	99,9	96,6	93,2	86,8	82,7	82,7	84,8	87,5	90,2	92,8

Fuente: EL PAIS, FMI

Mientras países como Alemania, Francia o Estados Unidos habían recuperado el nivel anterior a la crisis en 2011, España o Portugal no lo harán, en el mejor de los casos, antes de 2017, y eso con un cierto optimismo. Ahora mismo se puede asegurar un retraso no menor a uno o dos años sobre el proceso estimado por el FMI. No olvidemos, además, que ahora conocemos de primera mano la capacidad de Rajoy para empeorar el más negro de los panoramas.

La crisis como problema Perder más de una década en materia de desarrollo económico, con todas las consecuencias sociales que ello supone, viene a constituir todo un juicio de valor sobre la forma en que los españoles en general y la clase política en particular han gestionado un proyecto de futuro y administrado los recursos disponibles. Habría que preguntarse cuáles son las circunstancias históricas para que

la sociedad española manifieste una total falta de sentido de la realidad, es decir, una incapacidad muy notable para distinguir lo posible de lo que no lo es.

Porque lo cierto es que la razón última de todas las crisis, y ahí están las cuatro a las que nos hemos referido, ha sido siempre el intento de hacer como si no pasara nada frente a un desequilibrio económico grave, tanto en materia de inflación como, sobre todo, de balanza de pagos. Cuando ya no nos financian finalmente entendemos que la hipótesis de continuidad se ha agotado. Lo que quiere decir que España no previene sus crisis ni las anticipa y menos las afronta, le sobrevienen, generalmente cuando es demasiado tarde para limitar las pérdidas.

Se suele decir que aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir viejos errores. Pues bien, los españoles no hacen otra cosa que caer en las mismas trampas con diversas variantes, y la primera de todas es nuestra incapacidad crónica para enfrentarnos a las crisis. Tenemos una economía muy rígida y muy joven, construida con alfileres. Tenemos una sociedad inmadura que no entiende que ignorar los problemas, o retrasar las soluciones, no los resuelve sino que los hace socialmente más costosos.

Esto se evidencia en la conducción de la economía en tiempos de dificultades, que es cuando se mide la verdadera capacidad de un político. Porque cuando las cosas van bien, la economía la puede llevar hasta un crío. No tiene ningún misterio siempre que no les preocupen los problemas del medio y largo plazo y no tengan intención de hacer reformas, que es lo habitual en los políticos. Esto les permite a aquellos que viven esas épocas colgarse cualquier tipo de medallas con total impunidad. Así lo han hecho los políticos más recientes, como Aznar o Zapatero, que se atribuyeron el mérito de lo que estaba pasando sin hacer nada para merecerlo. Otro tanto ocurría en tiempos del franquismo. De esa época es un comentario ácido que viene como anillo al dedo a todo tipo de dirigentes poseídos por la euforia: "*no había desarrollo porque hubiera planes; había planes porque había desarrollo*". La política entendida como un hacer como que se hace.

Las cosas cambian de manera radical cuando llega la crisis hasta el punto de que, salvo que se den circunstancias particularmente afortunadas, como las devaluaciones sucesivas que nos sacaron del agujero en 1993, los problemas más graves sólo los resuelve el tiempo.

Si analizamos desapasionadamente las cuatro crisis que hemos descrito no hay duda que existen factores estructurales que hacen que la clase política y la sociedad españolas se resista a enfrentarse con situaciones complicadas que requieren cambios de orientación a veces muy duros. Hay uno evidente para que algo así suceda. Las instituciones que han determinado los ritmos de cambio en este país han sido la Administración y los Sindicatos, y ambas son básicamente conservadoras. Generalmente han hecho cuanto han podido para frenar o retrasar aquellas decisiones que nos podían haber preparado para afrontar los problemas, e incluso para prevenirlos. En todas las crisis, la Administración ha actuado reactivamente, cuando ya no había manera de eludir los cambios, que se han puesto en práctica tarde y mal. Los Sindicatos se han dedicado a preservar la herencia del franquismo que tanto ha favorecido a los trabajadores, a los fijos naturalmente. No hay mas que ver a qué ritmo se está reduciendo el déficit público o a qué velocidad se está aplicando la reforma laboral para entender que esas dos organizaciones están ahora mismo más interesadas en preservar el statu quo (lo que ellos llaman en términos metafóricos defensa del estado de bienestar) que en cambiar lo que hay que cambiar, una estrategia que ha llevado a la economía española al borde el abismo.

Además, planea la duda de si los españoles entienden realmente de qué va la economía. Su actitud vital está tan bañada en desconfianza que en la sociedad acaba primando la idea de la máxima seguridad. Y si esa seguridad no es compatible con la eficacia, peor para la eficacia. No hace mucho, una televisión privada preguntó a los oyentes de un telediario su opinión sobre una cuestión candente; la reforma del sistema de pensiones. La encuesta era muy simple y se componía de sólo dos preguntas. La primera era la de si opinaban que el sistema de pensiones estaba en crisis. La respuesta, abrumadoramente mayoritaria, fue que sí. La segunda pregunta era la de si estaban de acuerdo en prolongar la edad de jubilación. La respuesta, también abrumadora, fue que no. Puede parecer una anécdota pero es en realidad un reflejo exacto de la actitud de los españoles ante las dificultades.

Los españoles padecen un trastorno bipolar que hace compatible esa desconfianza hacia la economía con la exigencia de cosas que la misma no puede dar. Incluso en plena expansión, la mejora de la productividad sugería que nuestro potencial en términos de futuro era limitado, cosa que no preocupó a nadie y menos a los políticos. Por eso los compromisos a largo plazo que estaba asumiendo el estado de bienestar, tanto desde el punto de vista de las pensiones como de la sanidad, eran mucho mayores que los que se derivaban de nuestra capacidad económica. Los ajustes a los

que estamos asistiendo ahora son en gran parte un intento de bajar a la realidad. Llevamos muchos años consumiendo lo que todavía no hemos producido. No es de extrañar que esta práctica tenga una traducción financiera conocida: endeudamiento, un endeudamiento que vamos a derivar hacia las próximas generaciones. No hay nada peor que afrontar una crisis con un grave endeudamiento, como se ha demostrado.

Crisis económica y crisis política En la propia economía reside parte de nuestros problemas. Lo primero que hay que hacer es desechar la teoría de que estos tienen que ver con la crisis. En realidad, todos tienen su origen mucho tiempo atrás. Hasta el punto de que hubiéramos entrado en crisis de todas maneras porque el modelo anterior podía darse por agotado.

Una parte de esos problemas deriva de una cultura tradicional que envenena **las relaciones entre la economía y la administración**. Creíamos haber dejado atrás la autarquía y el proteccionismo pero ambas tentaciones asoman por todas las esquinas. Una buena parte de las empresas españolas sigue creyendo que sus beneficios dependen más de la protección del Estado que de la sanción de los mercados. La crisis ha destapado la enorme cantidad de reglas burocráticas, proteccionismos disfrazados, exceso de regulaciones, subvenciones encubiertas, y sectores de no mercado, que existen. Esta es una economía que nunca ha dejado de estar tutelada y vigilada.

El proceso de liberalización lleva un retraso de décadas. Apenas se ha aplicado la directiva de liberalización de servicios, Renfe no se ha abierto a la competencia (con una directiva aprobada en este sentido desde 2003), los problemas de horarios y aperturas comerciales, entre otros, indican que este país no ha hecho una apuesta seria por la liberalización en los últimos veinte años por lo menos, y en algunos sectores nunca. Además de confirmar la citada querencia por la tutela y la regulación: no deje que mi competencia haga lo que yo no quiero hacer.

Esto representa un estado de cosas insostenible porque los procesos empresariales se lentifican y bastardean hasta devenir surrealistas. Es lo que ha ocurrido con el fenomenal error de la tarifa eléctrica, un nudo gordiano donde se mezclan los apoyos al carbón nacional y las energías alternativas. Los precios de la energía han crecido un

70% en cinco años a pesar de lo cual el déficit de tarifa ha crecido hasta cerca de 25.000 millones.

Pero si la crisis pone en cuestión el modelo económico, cuestiona aún más el sistema político. La crisis ha puesto en evidencia a toda la clase dirigente. La incapacidad demostrada para reducir el déficit público a una velocidad razonable, sumada a las maniobras de engaño y ocultación practicadas con la crisis financiera, ha destruido la credibilidad de las autoridades políticas y administrativas, tanto en el exterior, lo que ha acarreado una crisis financiera sin precedentes, como en el interior, donde su descrédito es absoluto. No hay duda que una crisis de esta entidad, tanto por la forma en que se creó como por la manera en que ha sido gestionada, supone **una crisis política e institucional de primer orden**, la primera crisis política desde la transición, que obligará a replantear la forma de hacer las cosas en una democracia tan inmadura como la nuestra.

El paralelismo con la transición a la democracia de los años setenta es patente. Entonces una crisis de largo aliento reveló la inmadurez del tejido institucional y económico. Tampoco entonces la clase política fue capaz de afrontar los problemas, muchos de los cuales han llegado intactos hasta el presente. Se puede decir sin caer en la exageración que aquella transición mal hecha está en el origen de nuestra incapacidad para afrontar el presente. Entonces lo atribuimos a problemas derivados de una larga dictadura. Pero ahora ya no podemos culpar del estado de cosas al pasado. Porque han pasado cuarenta años y seguimos como estábamos.

Lo ocurrido es bastante lógico en la medida en que este país sale de una larga dictadura que intentó y consiguió por todos los medios que la sociedad no se organizara al margen de las estructuras de control y participación que el propio Régimen proponía. El fin de la dictadura y la inmadurez política de la sociedad provocó un vacío de poder que ha sido ocupado por instituciones como los sindicatos y los partidos políticos que han acabado por no representarse más que a sí mismos. Sobre todo cuando el dinero público se hizo cargo de sus presupuestos.

Es curioso que numerosos economistas hayan criticado acerbamente los procesos de desregulación que se han venido practicando desde los años noventa, algunos de ellos con tan catastróficos resultados como el del sistema financiero que ha dado origen a la crisis que estamos viviendo. Pero es curioso que no hayan percibido que un proceso similar se estaba dando en la Administración que, al amparo de la buena

coyuntura, desplegaba un talento y creatividad sin límites en múltiples iniciativas a las que nadie puso coto. ¿Quién controlaba el crecimiento exponencial del funcionariado y sus costes? ¿Quién estableció un método para medir la productividad y la calidad de sus servicios? ¿Desde cuando existe un análisis coste-beneficio de las inversiones públicas en infraestructuras llevadas a cabo con tan brillantes resultados en materia de puertos, aeropuertos, trenes de alta velocidad, etc? Ah, ¿pero existe un Tribunal de Cuentas?. ¿Realmente el Parlamento sirve para controlar al Ejecutivo? No cabe duda que, a la luz de los datos que están apareciendo, el aparato del Estado se descontroló por completo y no encontró en su camino hacia el desastre ninguna autoridad o regulación que le obligase a frenar a tiempo.

Este descontrol tiene su origen en el hecho de que el 80% de la clase política ha salido de la Administración lo que plantea un problema institucional que los ciudadanos han pasado por alto: la existencia de **un complejo político--funcionarial** que se ha alzado con el poder. Un hecho que no es ajeno al crecimiento irresistible del número de empleado públicos, que desde la Transición han pasado de unos 600.000 a más de tres millones. Además, ese Estado ha acabado por invadir el espacio civil financiando los partidos políticos, sosteniendo a la Iglesia, soportando a los Sindicatos, e intentando controlar todo tipo de instituciones económicas, en algunos casos con resultados tan catastróficos como los de las cajas de ahorro. No se trata sólo que financieramente esas intervenciones se hayan vuelto insostenibles como que esa tutela destruye la capacidad de esas instituciones para ser autónomas y autosuficientes.

Los síntomas de que la Administración está fuera de control y no tienen el menor interés en tocar suelo se multiplican. Desde la crisis el número de funcionarios ha aumentado en más de 200.000 personas; si quisiéramos mantener la relación preexistente con los trabajadores del sector privado habría que despedir a más de 600.000; sus costes no serían competitivos en ninguna economía de mercado como lo demuestra que el coste de un acto médico o de un alumno de secundaria sea un 40% de media superior al de su equivalente del sector privado; en la realización de sus inversiones de infraestructura el Estado no se ha guiado por ningún criterio de rentabilidad. Es curioso que una organización de semejante tamaño carezca de incentivos que premien a los mejores, o que en la práctica no se pueda despedir a nadie, haga lo que haga.

En las peores circunstancias que cabe imaginar, el Estado se ha resistido como gato panza arriba antes de tomar medidas dolorosas. No hay mas que ver las respuestas corporativistas que se han producido en cuanto se ha intentado que los funcionarios trabajen 37 horas y media a la semana como los demás mortales. El 90% de las protestas sociales que se han producido ante los recortes no han procedido de las clases más desfavorecidas sino de los funcionarios y siempre por una buena razón: la calidad del servicio. Supuestamente esa calidad sería infinitamente mejor si procede del sector público y no del sector privado. ¿Quién lo hubiera imaginado?.

La alianza entre la clase política (450.000 personas) y los empleados públicos, más de tres millones, han dado origen a un sistema de gobierno que ante las dificultades no duda en sacrificar el interés general antes de cercenar sus prerrogativas, su status y su poder. Subir los impuestos en plena crisis es sólo una manera de preservar sus intereses a costa de los ciudadanos y de la propia recuperación económica. La política de austeridad del gasto de la Administración es pura apariencia sin apenas efectos reales, un ajuste modesto a un ritmo casi estático, poco más de un punto de déficit por año, lo que lleva a incumplir sistemáticamente los objetivos fijados por Bruselas. Este año, las Comunidades Autónomas volverán a violar casi todas el tope fijado del 1,5% y no por poco. Varias de ellas están al borde del rescate, eso sí, sin condiciones. Todavía hay que gente que cree que la recesión se debe a la política de austeridad como si tener un déficit de entre el 11 y el 9% (2009-2011) no fuera la política más expansiva que cabe imaginar, también una política que no nos podemos permitir.

Cada día el Gobierno lanza globos sonda sin otra pretensión que calibrar el grado de rechazo que van a provocar medidas que tenían que haber sido tomadas hace tiempo. Por ejemplo, "*comenta*" una posible reducción de unos 20.000 efectivos de las fuerzas armadas, un colectivo de 150.000 empleados que tiene serias dificultades para desplegar 2.000 o 3.000 soldados en misiones más o menos humanitarias. También "*estudia*" la posibilidad de reducir el número de juzgados, muchos de los cuales no tienen ningún sentido, o "*apunta a la posibilidad*" de que las Diputaciones se hagan cargo de los servicios que ahora desarrollan Ayuntamientos pequeños. El de Jerez de la Frontera, con una deuda monstruosa de más de 1.000 millones y una plantilla inmensa de más de 2.500 empleados (seguro que no saben con exactitud cuantos son) se las ve y se las desea para aplicar un ERE de rescisión a 350 personas. Los Sindicatos han advertido que no les va a salir fácil ni barato.

Es la consecuencia de tener una clase política organizada desde arriba, de bajísimo nivel, en la que prima la lealtad sobre la eficacia, y que no se expone a adoptar medidas impopulares. En realidad, carece de visión de estado y desconoce cuales son esos intereses generales que deben prevalecer. En las cuestiones básicas deja pasar el tiempo. El resultado ha sido la parálisis.

Hemos salido del atraso económico, por lo menos relativamente, pero no somos capaces de salir del atraso político y administrativo. Como en Italia, el Estado es como una piedra atada al cuello de cualquier proceso de modernización y puesta al día. Es sintomático que, a pesar de lo ocurrido, los españoles sigan creyendo firmemente en la capacidad del Estado para sacarnos del agujero, contra toda lógica (no son capaces ni de ayudarse a sí mismos) y contra la experiencia del pasado. Mientras no superemos esa dependencia no habrá salida posible de la crisis.

Final El mundo está cambiando y la posición europea en ese mundo languidece. España tiene que salir al exterior en un momento en que la competencia internacional ha aumentado considerablemente, una competencia procedente de países cuyos costes laborales son infinitamente más bajos que los nuestros y que están demostrando capacidad para asimilar las nuevas tecnologías a mayor velocidad que nosotros. Como dice Marco Gardoqui, globalización quiere decir que alguien hace lo mismo pero a mitad de precio.

Desde el punto de vista tecnológico, una cuestión clave en el proceso de evolución de nuestra competitividad, nuestro balance es menos que discreto, sobre todo si lo comparamos con el de otros países. Tal vez condicionados por nuestro fracaso universitario, ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo, y el abandono de la formación profesional, nuestra capacidad para asimilar nuevos conocimientos se ha revelado mediocre. Así que tenemos un problema de competitividad planteado en términos muy negativos. Si no lo resuelve y pronto, España tiene todas las papeletas para convertirse en una nación con problemas económicos crónicos, incapaz de sostener el estado de bienestar que se ha dado a sí mismo y el formidable cuerpo administrativo en que se ha convertido su Estado. Si los españoles no se ponen las pilas les espera un proceso de decadencia más o menos rápido que les irá marginando progresivamente del mundo civilizado que evoluciona y progresa.

Conforme ahondábamos en la crisis nos íbamos encontrando en la compañía que nos corresponde, la de aquellos países cuyas prácticas sociales y políticas son

incompatibles con un crecimiento sostenido y sostenible: el Club Mediterráneo con Grecia, el mejor de todos, Italia, Portugal y naturalmente nosotros. En la medida en que los procesos de desarrollo se extienden en mancha de aceite, pareció que estos países eran capaces de sumarse a parecidos niveles de desarrollo y bienestar de los estados del norte. Todo el mundo se hacía lenguas de la modernización que estaban experimentando. Ante nuestro propio asombro, España llegó a disfrutar de una cierta popularidad, que sabíamos perfectamente injusta. El fracaso posterior ha sido tan manifiesto que ha servido para que nos miren con ojos nuevos, que en realidad son los de toda la vida. Todos los tópicos y lugares comunes sobre los pueblos latinos se han puesto al día. El coste para el país en términos de oportunidades de futuro va a ser enorme.

La crisis actual tendría aspectos muy positivos si nos obligase a emprender un duro camino que nos podría llevar, si nos atrevemos, a la mayoría de edad como economía y como sistema político. Como este es un país que cambia cuando no tiene otro remedio, es posible, pero no seguro, que una crisis tan profunda y tan larga nos obligue a replantearnos nuestra forma de funcionar, cosa que jamás hubiéramos hecho en otras circunstancias.

Y es que las apoyaturas que nos permitían funcionar como eternos menores de edad, sin hacer reformas, han desaparecido. Consideremos, como ejemplo, lo que queda de aquellos factores que permitieron a España salir del subdesarrollo en los años sesenta. El turismo ha alcanzado su máximo desarrollo posible y no aportará nuevos impulsos (bastante es que se mantenga). De las remesas de emigrantes no queda casi nada; en realidad, los saldos exteriores se han vuelto negativos ya que son nuestros inmigrantes los que envían dinero a sus países de origen. Y de la inversión exterior sólo se puede decir que hace tiempo que España ha dejado de ser un país atractivo en este sentido. A ello podemos añadir que los fondos estructurales dejarán de fluir o serán, en el mejor de los casos, mucho menos importantes en el futuro (lo que plantea una crisis diferencial en aquellas Comunidades Autónomas que se han vuelto dependientes de ellas).

Además, el sector inmobiliario ha dejado de ser una locomotora del crecimiento, los mercados mayoristas e interbancarios ya no son accesibles a nuestras entidades financieras, el empleo público no puede seguir creciendo, etc. Cómo estarán las cosas que ni siquiera podemos mantener la minería del carbón, o nos estamos replanteando la tarifa energética, que es lo último que afrontaría un político en ejercicio. Si el precio

del barril de petróleo vuelve a crecer la situación puede volverse dramática. De hecho estamos al borde del abismo.

Aún así, hasta ahora la respuesta política y social es lo más parecido a un suicidio programado. Europa no nos reprocha las reformas que hemos hecho; lo que nos reprocha es que no las apliquemos, y consiguientemente no obtengamos resultados prácticos de las mismas. Los salarios siguen sin bajar, todo lo más se han moderado. En Irlanda los salarios han caído una media del 15%. Europa no nos reprocha que no intentemos recortar el déficit fiscal pero su escepticismo es total cuando conoce los resultados concretos, sobre todo si se le anuncia, como hizo la señora Salgado un mes de diciembre, que va a cumplir los objetivos y luego estos se desvían más de un 50%. Que un país con semejante prima de riesgo sólo sea capaz de reducir el déficit a ritmo de un punto al año hace que pierda toda credibilidad. Como se ha dicho, *"no es que el Estado haya dejado de gastar, lo que ha dejado es de pagar"*.

A la vista de los comportamientos sociales y la gestión de la crisis, nos asalta la duda de si nuestra clase política, y la sociedad civil con ella, es capaz de enfrentarse a sus problemas con rigor y resolución. O aprovechamos el estado de necesidad en que estamos sumidos, o la crisis derivará hacia una cronificación de nuestros problemas. Con la mitad de España por lo menos (Andalucía, Murcia, La Mancha, Extremadura) abonada al subdesarrollo.

En realidad, la última esperanza que nos queda es la intervención europea. Una vez que los gobiernos del PP y del PSOE han demostrado que son incapaces de implementar un verdadero plan de crisis, o lo hacen los llamados hombres de negro, con rígidas y transparentes normas de control y verificación de todas las Administraciones, sobre todo en materia de personal y presupuestos, o se pone en práctica una solución política a la italiana, tipo Monti, también impuesta por Europa, por el que un gobierno de técnicos aplique, pero de verdad, un plan de ajuste y reformas

Por una serie de circunstancias históricas, o de razones sociológicas, en lugar de aprovechar una coyuntura favorable para pensar en el futuro y consolidar un desarrollo sostenible, nos hemos dedicado a disfrutar del presente, postura filosófica muy respetable pero de corto recorrido. La reacción de quienes habiendo sido pobres, no dejan de serlo nunca. Los españoles actúan igual que aquellos a los que toca la

lotería, la mayor parte de los cuales vuelve en poco tiempo a ser tan pobres como antes.

A lo largo de los últimos cincuenta años, España ha tenido todas las oportunidades del mundo para haberse convertido, de una vez por todas, en una sociedad avanzada, capaz de desarrollar un modelo de crecimiento que nos podía haber proporcionado un lugar al sol en un mundo que evoluciona a toda velocidad. Fue el tiempo en el que nos alimentó el turismo, la inversión exterior, etc. Todo ese capital ha sido despilfarrado en buena parte, transformado en inversiones en infraestructura de dudosa utilidad, crecimiento desmedido de la burocracia y un sistema educativo y una sanidad enormes pero de baja calidad. Pocos países han tenido un escenario a su favor tan favorable y durante tanto tiempo. Tiempo despilfarrado y coyuntura que no se volverá a repetir. España ha malgastado una oportunidad histórica.

50 años

Antxon Perez de Calleja, septiembre 2012

E-mail: antton-calleja@terra.es